**HOY JUEVES 9
DE ABRIL DE 1987**

PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

Derecho a la información

Diez años de reforma política

Hace exactamente diez años: apenas diez años, o hace ya diez años, según la perspectiva que cada quien adopte, nació la reforma política: en abril de 1977, el entonces secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heróles, hizo la primera presentación de un propósito democratizador que incluyó no sólo un nuevo sistema electoral, de partidos y de funcionamiento parlamentario sino también el derecho a la información

Reyes Heróles era resuelto partidario de ese derecho. Concededor de los recientes desenvolvimientos doctrinarios acerca del Estado social de derecho, de seguro no le eran ajenos los antecedentes europeos del derecho a la información. Cuando en 1975 tuvo ocasión de incluirlo en el Plan Básico que sería presuntamente puesto en práctica por quien resultara candidato priísta a la Presidencia de la República, prohijó la primera definición de este derecho:

“El derecho a la información —dijo el plan— constituye una nueva dimensión de la democracia; es la fórmula eficaz para respetar el pluralismo ideológico, esto es, la diversidad y riqueza en la expresión de ideas, opiniones y convicciones”. Es necesario, recomendaba el plan, que “se realice una revisión a fondo de la función social de la información escrita y de la que se genera en la radio, televisión y cine, así como la evaluación de los procedimientos y formas de organización de las

entidades públicas y privadas que producen, para que refuercen y garanticen la libertad y el derecho de expresión de los profesionales de la información al mismo tiempo que se fomente también la expresión auténtica, la confrontación de opiniones, criterio y programas entre los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de científicos, profesionales y artistas, las agrupaciones sociales y, en general, entre todos los mexicanos... En los próximos años deberá ensancharse la comunicación social con la población a fin de hacer de esa actividad un auténtico instrumento de contacto popular y democrático... Un derecho a la información así concebido evitará tanto el monopolio mercantilista como la información manipulada”. En suma, lo que el Plan Básico proponía era considerar tal derecho no “simple y sencillamente (como) la libertad para informar”, sino como “el derecho que los hombres tienen como receptores de información”.

No tanto porque yo lo dijera, sino co-

mo ilustración del modo en que esas nociones iban permeándose en la sociedad mexicana, debo recordar que casi simultáneamente con la formulación del Plan Básico, que no sería dado a conocer sino meses más tarde, me permití proponer en noviembre de 1975, ante el entonces candidato presidencial López Portillo, “una nueva garantía social”... “que debería instaurarse en beneficio de los ciudadanos” consistente en “el derecho de estar bien informados”. En aquella ocasión propuse establecer “una radio y televisión sociales, no sólo en cuanto a sus fines, sino también en cuanto a los órganos que la operen. Las universidades, los gremios sólidos de profesionales, las agrupaciones de intelectuales y artistas, quienes en suma crean y difunden la cultura, deben manejar la radio y la televisión”.

El tema, sin embargo, producía en los ambientes oficiales más dudas que certidumbres. Las expresé por primera vez el propio candidato López Portillo, en junio de 1976 cuando se preguntó, con esa

especie de angustia hamletiana, vacilante, que en este tema lo asaltaría una y otra vez:

“¿Quién y para qué se comunica?, ¿quién informa, quién tiene la razón? ¿Que el Estado controle a otros, que controle a todos menos a mí, porque yo quiero ser el Estado para controlar a todos? ¿Cada grupo de interés tiene o no derecho de informar? ¿Qué ocurre con quien no tiene los medios para comunicar? ¿En qué condición queda esa mayoría silenciosa que no puede hacerlo? ¿Habla por ellos el Estado? ¿Es supletorio de la opinión de los silenciados? ¿La información es un servicio público? ¿Sólo el Estado puede prestarlo? ¿Hay opiniones que son especialmente calificadas? ¿El Estado debe controlar a todos incluso a los que denuncian la deficiencia del Estado, su insuficiencia, su corrupción, su desviación?”.

No podría, López Portillo, resolver sus interrogantes.